



PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Para más información o coordinar una entrevista, por favor contactar a:

- Cory Ruf, Responsable de Comunicaciones, Amnistía Internacional Sección Canadiense (en inglés), +1-647-269-1795, media@amnesty.ca
- Val Croft, Coordinadora de Comunicaciones, MiningWatch Canada, +1-416-707-5986, val@miningwatch.ca
- Cheryl McNamara, Coordinadora de Comunicaciones, KAIROS Canada, +1-416-875-0097, cmcnamara@kairoscanada.org
- Amanda Klang, especialista principal en comunicaciones, Canadian Centre for Policy Alternatives, +1-514-996-3515, amanda@policyalternatives.ca

Por qué decimos no: Mujeres indígenas y defensoras ecuatorianas traen un mensaje de preocupación a Canadá en medio de negociaciones comerciales de alto riesgo

Toronto, 26 de septiembre de 2024 - Cuatro mujeres lideresas en la primera línea de los esfuerzos cada vez más peligrosos para proteger los derechos y la naturaleza en Ecuador visitarán Canadá la próxima semana para hablar en contra de la intensificación de las negociaciones comerciales destinadas a ampliar proyectos canadienses de extracción de recursos en regiones ecológicamente vulnerables.

Durante la gira de siete días **Por qué Decimos No**, que comienza el 29 de septiembre, cuatro mujeres indígenas y defensoras se reunirán con dirigentes gubernamentales, parlamentarios, negociadores del acuerdo comercial, líderes indígenas, organizaciones de la sociedad civil y la prensa en Toronto, Ottawa y Montreal. La gira arranca antes de la cuarta ronda de negociaciones comerciales de alto nivel que podría abrir las compuertas a nuevas inversiones canadienses de extracción de recursos en Ecuador.

Aunque Canadá se ha comprometido a garantizar un acuerdo comercial inclusivo que respete la democracia y los derechos humanos, no se ha consultado a las naciones indígenas ni a las comunidades rurales de Ecuador, a pesar de que éstas denuncian abusos graves y continuos relacionados con los proyectos canadienses existentes. Este incumplimiento viola la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), de la que Canadá es parte y que ha integrado en su legislación nacional.

“Nuestro territorio, nuestros derechos y nuestras vidas están en juego en este acuerdo comercial. Se está negociando a nuestras espaldas y sin nuestro consentimiento”, afirma Zenaida Yasacama, integrante de la delegación a Canadá y vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización indígena más grande del

Ecuador. “Ya sabemos por experiencia el daño que traerá más minería canadiense, por eso venimos a Canadá para pedir urgentemente al gobierno que reconsidere un acuerdo comercial que sabemos empeorará la situación de deterioro de los derechos humanos.”

Al menos 15 empresas mineras canadienses operan actualmente en Ecuador. Muchas de ellas se enfrentan a [acusaciones](#) de abusos, tales que la realización de actividades de exploración en territorios indígenas sin consulta ni consentimiento y colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir violentamente la protesta social.

Solaris Resources es una de las empresas canadienses que se enfrentan a acusaciones de abusos en su intento de hacer avanzar su proyecto Warintza de cobre-oro a cielo abierto en el territorio Shuar Arutam en la Amazonía ecuatoriana. Canadá y Ecuador deben investigar estas denuncias, exigir responsabilidades a los culpables y garantizar reparaciones a las comunidades afectadas.

“Ya estamos sufriendo impactos sociales y medioambientales muy graves. Estamos siendo amenazadas, nuestro territorio está siendo expropiado y estoy en riesgo por pronunciarme”, dice Fanny Kaekat, delegada para hablar en Canadá en nombre de la organización del [Pueblo Shuar Arutam](#) y [Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva](#), un colectivo de mujeres de siete naciones indígenas de la región amazónica. “El gobierno ecuatoriano no nos ha consultado y oculta información sobre sus negociaciones mientras convierte nuestros territorios en zonas de sacrificio”.

La delegación de Ecuador está igualmente preocupada por los planes del gobierno de incluir, a petición de la industria minera, el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) en el acuerdo comercial Canadá-Ecuador. La solución de controversias entre inversores y Estados, una forma de arbitraje privado que no rinde cuentas, permite a los inversores extranjeros demandar a los gobiernos que refuerzan la protección del medio ambiente o de los derechos humanos. Múltiples organismos y expertos de la ONU han [recomendado](#) que no se incluya el ISDS en los nuevos acuerdos comerciales y que se elimine de los ya existentes, advirtiendo de que la mera amenaza de una demanda multimillonaria o multimillonaria conduce a la paralización regulatoria, encadenando a los Estados en sus esfuerzos por combatir el cambio climático y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

“El ISDS ya está prohibido por la Constitución de Ecuador y el pueblo votó en referéndum el pasado mes de abril para reafirmar esta prohibición”, afirma Ivonne Ramos, de [Acción Ecológica](#), organización que participa en la visita a Canadá. “Incluir una disposición para el ISDS en este acuerdo comercial limitaría drásticamente la capacidad del Ecuador para gobernar en el interés de la población ecuatoriana y sienta precedentes de grave irrespeto de la Constitución y de la voluntad popular”.

Como todas las integrantes de la delegación ecuatoriana en Canadá, Hortencia Zhagüi representa a los crecientes movimientos en todo Ecuador para fortalecer la democracia, defender los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, y proteger el agua y la

biodiversidad en un momento de crisis climática cada vez más profunda. Zhagüi, que representa a la Escuela de mujeres de Agroecología de Kimsakocha y los Sistemas de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarquí, participa en los esfuerzos de las comunidades para proteger el páramo de los daños que ocasiona Dundee Precious Metals, una empresa minera canadiense. Un [estudio independiente realizado](#) en 2022 concluyó que el proyecto de mina de oro de Loma Larga propuesto por la empresa constituye una “bomba de tiempo” de contaminación por arsénico de esta importante y delicada cuenca hidrográfica.

“Este Tratado de Libre Comercio amenaza con aumentar las inversiones mineras canadienses aquí, poniendo en grave riesgo la salud del páramo, la biodiversidad que lo sustenta y las miles de personas que dependen del agua que proporciona”, afirma la señora Zhagüi. “Del mismo modo que el agua fluye a través de las fronteras, las consecuencias de este acuerdo comercial se extenderán mucho más allá de las fronteras de nuestros países. Sin embargo, si nos unimos, podremos detenerlo antes de que sea demasiado tarde”.

Canadá es el mayor inversor extranjero en Ecuador, con más de [1.800 millones de dólares](#) invertidos sólo en el sector minero. Los profundos cambios normativos de los últimos años han tratado de convertir a Ecuador en un destino primordial para la minería canadiense, y este acuerdo comercial representa un paso decisivo en la profundización de las relaciones bilaterales entre ambos países.

La adopción de políticas de seguridad de línea dura y militarizadas y de decretos ejecutivos en Ecuador ha agravado la grave situación de derechos humanos. Las personas que defienden los derechos, la justicia y se oponen al impacto de las empresas extractivas se enfrentan a graves riesgos de seguridad, especialmente quienes trabajan para proteger la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Itinerario

La **Gira Por Qué Decimos No** comienza en Toronto, donde las delegadas ecuatorianas se reunirán con líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil, y mantendrán contactos con periodistas. Del 1 al 3 de octubre, la delegación estará en Ottawa para reunirse con parlamentarios, comisiones parlamentarias y dirigentes gubernamentales, entre ellos la Embajadora de Canadá para la Mujer, la Paz y la Seguridad y el Negociador Jefe de Canadá en las conversaciones comerciales entre Canadá y Ecuador, así como representantes de las Ministras de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional. Habrá una conferencia de prensa en Parliament Hill el 2 de octubre (hora por confirmar, en el National Press Theatre, Room 325, 180 Wellington Street). La delegación también se reunirá con sindicatos e intervendrá en una reunión pública el 3 de octubre por la tarde en la sede de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá (7 PM EDT, 6ª planta, 233 Gilmour St.). La gira concluirá en Montreal, donde las delegadas se reunirán con las partes interesadas de Quebec y los medios de comunicación francófonos. Intervendrán en una reunión pública el 4 de octubre en la *Auditorium de la Confédération des Syndicats Nationaux* (CSN), (1601, avenue de Lorimier, Montréal).

Las promotoras de la gira son cinco organizaciones canadienses líderes en los ámbitos de los derechos humanos, la justicia medioambiental y el trabajo: Amnistía Internacional Canadá, el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, el Congreso Laboral Canadiense, MiningWatch Canadá y KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives. 13 sindicatos canadienses y organizaciones de la sociedad civil apoyan la visita.

Citas de apoyo:

- “Canadá tiene la obligación de garantizar que sus acuerdos comerciales no socaven los derechos humanos, especialmente los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades históricamente marginadas. En medio de las violaciones generalizadas de los derechos humanos en Ecuador, especialmente en las comunidades afectadas por la minería, nos preocupa profundamente que las negociaciones comerciales entre Canadá y Ecuador y la promoción de más minería canadiense en Ecuador amenacen con empeorar una mala situación. Instamos al gobierno canadiense a que actúe en respuesta a nuestros reiterados llamamientos para que se realice una evaluación independiente del impacto sobre los derechos humanos”. – Ketty Nivyabandi, Secretaria General, **Sección Canadiense de Amnistía Internacional (de habla inglesa)**
- “El compromiso de los gobiernos de Noboa y Trudeau de concluir un acuerdo comercial 'inclusivo' este año suena a vacío. Se espera que el acuerdo previsto genere escasas ganancias comerciales reales para cualquiera de los dos países -de pocos millones de dólares- y está claramente dirigido, en cambio, a impulsar los intereses mineros y agrícolas canadienses en Ecuador, al tiempo que bloquea reformas económicas impopulares que benefician a las élites ecuatorianas”. – Stuart Trew, investigador principal, **Centro Canadiense de Políticas Alternativas**
- “Las mujeres, los niños y las personas con orientación sexual no normativa, especialmente los pueblos indígenas y afrodescendientes, son los que más sufren las consecuencias de la extracción de recursos. A menudo se ven desplazados, sufren la destrucción de los conocimientos ancestrales indígenas y padecen diversas formas de violencia sexual y de género relacionadas con la afluencia de trabajadores a sus comunidades. Contrariamente al mito, experimentan un descenso de la prosperidad económica y son vulnerables a importantes dolencias y enfermedades al manipular agua contaminada, que utilizan en las tareas domésticas. Aunque rara vez se les consulta sobre los proyectos mineros propuestos, las mujeres suelen hablar como líderes en la defensa de la tierra y el agua, lo que las hace más vulnerables a las represalias violentas”. – Silvia Vásquez-Olguín, Coordinadora de Asociaciones Mundiales para América Latina y Justicia de Género - **KAIROS: Iniciativa Ecuémica Canadiense por la Justicia**
- “La población ecuatoriana conoce de primera mano el daño que las empresas mineras canadienses pueden causar en sus comunidades, ya que afrontan proyectos impuestos mediante la violencia, la militarización y sin consentimiento. Un Tratado de Libre Comercio Canadá-Ecuador significa más minería con protecciones mínimas para las

comunidades y el medio ambiente, y sin mecanismos en Canadá que puedan hacer que las empresas rindan cuentas por los abusos”. – Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina, **MiningWatch Canada**

Biografías de las delegadas:

Fanny Kaekat lidera actualmente relaciones exteriores del Pueblo Shuar Arutam (PSHA) y es integrante fundadora de Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva. Estas defensoras han sido amenazadas y agredidas impunemente por defender su territorio ancestral, la naturaleza, la salud de sus comunidades y la seguridad de mujeres y niñas. En febrero, PSHA presentó una denuncia ante la Comisión de Valores de la provincia de Columbia Británica (Canadá) contra Solaris Resources y su proyecto minero Warintza en territorio shuar.

Hortencia Zhagüi representa a los Sistemas de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui. Las comunidades indígenas y campesinas que forman la organización se enfrentan a los riesgos de las empresas mineras canadienses en el Páramo de Kimsakocha, un humedal andino de gran altitud que proporciona agua a decenas de miles de personas y es esencial para la conservación de la biodiversidad. Hortencia también es integrante de la Escuela de Mujeres de Agroecología de Kimsakocha, que promueve la soberanía alimentaria.

Zenaida Yasacama del Pueblo Ancestral Kichwa de Pakayaku y vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La CONAIE es la organización más grande de derechos indígenas del Ecuador. El 2 de julio, la CONAIE presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de Consulta Libre, Previo e Informado para el correspondiente consentimiento de proyectos en los territorios de las comunidades indígenas. Recientemente, el equipo de Zenaida participó en una exitosa campaña para proteger la Reserva de la Biosfera Yasuní.

Ivonne Ramos trabaja con Acción Ecológica, una organización ecologista y de derechos humanos creada en 1986 y es integrante de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador. Ivonne trabaja por la protección de los defensoras y defensores de la naturaleza y acompaña procesos de defensa territorial liderados por mujeres, haciéndolos visibles ante instancias locales, nacionales e internacionales. Ella es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales y de Saramanta Warmikuna, red de mujeres defensoras de la naturaleza.